

## Nuevas formas de gobernanza en los espacios públicos. Casos de estudio para la ciudad de Ámsterdam y Barcelona

P. Lloret Gual<sup>1</sup>\*

<sup>1</sup> Universidad de Valencia. C. Avda. Blasco Ibáñez 28 46010, Valencia

Pilarlloretgual@gmail.com

**RESUMEN:** El término Do-ocracy acuñado a una nueva forma de democracia más directa, está surgiendo con gran fuerza en los últimos tiempos. La presente comunicación, pretende dilucidar las oportunidades y amenazas que están surgiendo a partir de la misma. El alto crecimiento de iniciativas bottom-up en los Países Bajos, ha llevado al gobierno holandés a la realización de diferentes estudios sobre el crecimiento de estas iniciativas y de qué modo, puede el poder público gestionarlas. En el contexto de crisis del Estado del bienestar y austeridad económica, el gobierno holandés se plantea la eficiencia y legitimidad de este tipo de iniciativas para determinadas funciones públicas. Por ello, el estudio pretende analizar cómo y por qué han surgido estas iniciativas y ver las consecuencias que se derivan de las mismas en la planificación territorial. Concretamente, se han analizado dos casos de iniciativas bottom-up para las ciudades de Ámsterdam y Barcelona. A partir de su análisis y posterior comparativa, se pretende obtener algunas claves que permitan reflexionar de qué manera el poder público gestiona este tipo de iniciativas y cual sería o debería ser la mejor forma de hacerlo.

**Palabras-clave:** bottom up, uso temporal, espacio público, autogestión

### 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En primer lugar se debe precisar que se quiere decir cuando se habla de do-ocracy. Este término, tal y como afirma Van de Wijdeven (2012), está dentro del contexto en el que los ciudadanos activos desean contribuir en el ámbito público participando directamente en vez de votar, deliberar o negociar. Este incremento de interés por la democracia directa está cada vez más presente en la sociedad de participación.

De este modo, se entiende el término do-ocracy como “hacer” incluyéndolo dentro de los modos dominantes en el proceso de toma de decisiones. Los ciudadanos cada vez participan más activamente en la esfera pública, concretamente a nivel de barrio. Estas acciones de participación directa, forman parte de un proceso de co-creación de la esfera pública dónde los propios ciudadanos están ofreciendo directamente servicios públicos (Verhoeven et al., 2014). La filosofía que instrumentan estos ciudadanos, es la de actuar para solucionar un problema frente a la espera de una solución por parte del poder público. Ante esto, el espacio público se convierte en objeto de contestación por parte de la sociedad tal y como menciona Simon Springer (2010). Se trata de una respuesta local ante un problema global como es la crisis del Estado del bienestar. Dentro de este contexto de crisis económica, social y cultural, se están reformando las formas de resistencia y resiliencia urbanas. Algunos estudiosos dirigen estas formas directas de compromiso ciudadano en dirección al déficit democrático producido por un fortalecimiento de las instituciones liberales democráticas (Andrea Cornwall, 2003). Quizás, precisamente por este cambio de filosofía en el ciudadano, en tiempos de austeridad, los gobiernos muestren un especial y tal vez peligroso interés por la do-ocracy.

Dentro de este contexto, el gobierno holandés, ha realizado estudios sobre el crecimiento de estas iniciativas (cada vez mayores) y el modo en el que el poder público puede o debe gestionarlas. Los comités científicos y asesores, aconsejan al gobierno que muestre más confianza en la capacidad de los ciudadanos para resolver conjuntamente problemas de la esfera pública. La razón más frecuente para promover la implantación de mecanismos de participación es la mejora de los servicios públicos así como mejorar la

---

\* Estudiante del Máster Técnicas de Gestión del Territorio y M.A. Colaboradora en el proyecto GOBTERTER “Del Gobierno a la gobernanza y gobernabilidad efectiva del Territorio” (Ref.: CSO2012-36960).

eficiencia, equidad y sostenibilidad de los mismos. (Johanna Speer, 2012). Por ello, probablemente, la do-ocracy sea la forma más eficiente para aplicar mecanismos de gobernanza participativa en el espacio público, siempre y cuando esté bien gestionada y sean definidos bajo acuerdos institucionales que faciliten la participación ordinaria de los ciudadanos en los asuntos públicos (Andersson & Laerhoven, 2007).

Esta nueva forma de participación, debería ser controlada, evaluada y criticada ya que en ausencia de ello, el Estado podría perder parte de sus funciones básicas. Por tanto, la do-ocracy no puede suponer un trasvase de funciones del Estado a los ciudadanos sino que debería ir encaminada a una co-gestión de lo público.

Dentro del concepto de do-ocracy, existen dos variantes. Por un lado, las iniciativas bottom-up (de abajo-arriba) y por otro lado las iniciativas top-down (de arriba-abajo). Como se deduce fácilmente, las iniciativas bottom-up nacen, crecen y se mantienen desde la ciudadanía mientras que las iniciativas top-down vienen impulsadas por el propio gobierno con el objetivo de que la ciudadanía participe.

A lo largo de estos últimos años, estas iniciativas han ido creciendo cada vez más. Este recorrido se ve reflejado en las 2500 iniciativas top-down presentes en Ámsterdam hasta finales de 2011, y las 68 iniciativas bottom-up desarrolladas en la actualidad. Las iniciativas ciudadanas pueden situarse en el mapa gracias al trabajo realizado por ciudades en transición (<https://stedenintransitie.nl/amsterdam>), organización con la que colabora el ministerio de interior y relaciones del reino de Holanda.

Esta organización en la que participan planificadores urbanos de toda Europa solo cuenta con una actualización sobre cinco iniciativas ciudadanas en la ciudad de Madrid.

Respecto a Barcelona, existen unas 22 iniciativas bottom-up y alrededor de 27 iniciativas top-down; en este caso no existe una actualización precisa de la cuantificación de los mismos. Los datos se han obtenido a través de noticias de prensa y un estudio elaborado por la asociación la “participación canta a Barcelona” donde se realizó un mapa sobre las iniciativas top-down y bottom-up en el año 2010.

Frente a la ausencia de un registro oficial acerca de estas iniciativas, sería conveniente que el gobierno español o autonómico de cada región plantease la realización de un estudio sobre el crecimiento de estas iniciativas debido a la implicación que tienen tanto sobre el territorio como en la esfera pública.

Para poder obtener una visión general del contexto en el que se envuelven las iniciativas bottom-up, se han recopilado las características más comunes que definen este tipo de iniciativas.

En el caso de Barcelona:

- Lucha por recuperar edificios industriales abandonados
- Demandas de proyectos alternativos frente a los propuestos por el gobierno
- Auto-gestión de los espacios públicos en desuso
- Demanda de nuevos procesos de participación
- Creación de redes sociales y co-working

Para el caso de Ámsterdam;

- Creación de espacios para fomentar el co-working , las redes sociales y el espíritu emprendedor
- Formas alternativas para la producción de energía
- Revalorización de edificios abandonados o sin uso
- Desarrollo de la economía social

Para estudiar el impacto y efectos de estas iniciativas, se ha seleccionado un caso representativo de bottom-up para cada ciudad, de manera que se pueda comparar cómo han sido gestionadas por el poder público y el proceso de autogestión en las mismas. En el caso de la ciudad de Barcelona se ha escogido “Can Batlló” y para la ciudad de Ámsterdam “De Meevaart”. Ambos casos ofrecen un servicio social y son gestionados por los vecinos.

## 2. CASOS DE ESTUDIO

El análisis de ambos casos, se ha llevado a cabo a partir de visitas de campo para conocer la realidad de las iniciativas así como la realización de entrevistas a los diferentes actores implicados. En Barcelona, se entrevistó a un miembro de la asamblea general de Can Batlló y al ex alcalde de la ciudad. Para el caso holandés, se entrevistó a los gestores y responsables de Meevaart: Firoez Azarhoosh y Pierre Mehlkoph. A parte de las entrevistas realizadas, se han tenido diferentes reuniones con expertos en la materia de manera que se ha podido

contextualizar la situación en Holanda. Estas reuniones han sido realizadas con diferentes colectivos que directa o indirectamente intervienen en el proceso:

- Gestores de diferentes iniciativas bottom-up (Simon Van Dommelen asesor cultural y desarrollo urbano de noorderpark)
- Responsables de la administración pública que trabajan en estos temas (Elvira Vreeswijk, departamento de planificación del Ayuntamiento de Ámsterdam)
- Asesores políticos del gobierno holandés (Aldert de Vries, asesor del ministro de interior y relaciones del reino)
- Instituciones públicas del gobierno holandés en pro de la participación (Anna domingo Project manager de la institución pública “Prodemos”)
- Investigadores de la universidad de Ámsterdam (Imrat Verhoeven)

Todas las reuniones han sido llevadas a cabo a partir de una serie de preguntas definidas que se han realizado a todos los colectivos. La selección de estos grupos de interés, se ha realizado con el fin de obtener por un lado una visión pragmática de la realidad (gestores, gobierno...) y por otra tener una visión más filosófica de la cuestión (universidad, Prodemos). Tanto las visitas de campo como las entrevistas realizadas se han seleccionado como método de estudio por considerarse la metodología más eficaz, factible y útil para conocer la realidad del proceso.

## **2.1. Can Batlló**

El espacio de Can Batlló es una antigua zona industrial construida en 1888 en el barrio de Labordeta (Barcelona). Esta zona ha sufrido muchos cambios desde su inicio hasta la época actual. Ha pasado desde la colectivización en la segunda república hasta la privatización de la misma en los años setenta bajo la dirección de Juan José Ramonet, empresario muy influyente en la época franquista. Durante todo este largo trayecto hasta la actualidad, se ha visto sometida a la aprobación de diferentes planes;

- En 1974 se aprueba el plan metropolitano de Barcelona dónde ya se produjeron muchas críticas por parte de los vecinos al considerar que el plan iba en contra de la morfología física y social del barrio.
- En 1976 dentro del contexto económico recesivo y la llegada de un alcalde más conciliador, el espacio de Can Batlló es calificado como zona para equipamiento público y zona verde.
- Con la llegada de los años 90, llega la transformación urbana al barrio de Labordeta. Los propietarios comenzaban a especular sobre los beneficios que podrían obtener si la zona era calificada para la construcción de viviendas. Sin embargo, esta calificación no llegó y muchos propietarios abandonaron el lugar.
- En 1992 los propietarios de Can Batlló elaboran un proyecto en el que se propone la compensación económica al ayuntamiento a cambio de 60.000 metros para construir torres de lujo. El proyecto no es aceptado por el Ayuntamiento al considerarse que estaba sometido sólo a intereses privados pero deja la posibilidad de cambiar el plan en la zona prevista como zona verde y equipamientos públicos.
- En 2001 la mayor propietaria de Can Batlló (empresa Gaudir) ofrece la posibilidad de construir 600 apartamentos y un hotel de lujo a cambio de compensación económica para el Ayuntamiento. En un primer momento, no se alcanza un acuerdo ya que las condiciones impuestas por la inmobiliaria suponían la utilización de más espacio del que estaba previsto para viviendas. Ante la negativa, la empresa lanza una nueva oferta que en este caso el Ayuntamiento acepta y los vecinos también pero con la exigencia de más equipamientos públicos en la zona.
- En 2006 se aprueba la modificación del plan para que se desarrolle la propuesta de Gaudir pero en ese momento comienzan a verse atisbos de la llegada de la crisis económica y el plan es aplazado de nuevo.
- En 2009, los vecinos cansados de los continuos aplazamientos en el desarrollo del plan, deciden hablar con el Ayuntamiento. La asociación de vecinos establece la siguiente condición; si el 5 de junio de 2011 la obra no ha comenzado, los vecinos entraran en Can Batlló y desarrollarían las demandas previstas. Es en este momento cuando se crea la plataforma “Can Batlló es per al barri”.
- Cuatro días antes de llegar la fecha límite, el Ayuntamiento adquirió el bloque 11 de manera que pasa a ser de titularidad pública y llegan al acuerdo de permitir a los vecinos el uso temporal de esta nave. La condición para este uso es que se destine como equipamiento social y cultural para el barrio. Por tanto, frente a una posible ocupación, los vecinos celebraron la apertura del bloque 11.

- En 2011 CIU aprueba el “Plan Esmenta”. Este plan pretende liberar la situación de parálisis que han sufrido muchos espacios como Can Batlló debido a la crisis económica. Dicho plan, tiene el propósito de construir más de 16.000 apartamentos en el espacio de Can Batlló en los próximos 12 años.

En la actualidad, la plataforma Can Batlló continua desarrollando nuevos proyectos con colectivos muy diversos (p. ej. La col arquitectura). El próximo reto es la creación y promoción de la economía social cooperativa en otra de las naves por las que han llegado a un nuevo acuerdo de cesión con el ayuntamiento. El proyecto se llamará “coopolis” y estará enfocado en la formación y el alquiler de 42 espacios para desarrollar ideas basadas en esta temática, con una estancia máxima de tres años.

En la plataforma “Can Batlló es per al barri” se puede encontrar un perfil social muy variado: jóvenes, ancianos, desempleados, trabajadores, etc. A pesar de la presencia de gran cantidad de vecinos se pueden encontrar personas que no procedan de Labordeta. Cabe resaltar, la importancia que ha tenido este barrio en la lucha obrera y reivindicativa de la recuperación del espacio de Can Batlló.

A través del convenio de cesión firmado por el Ayuntamiento se establece el uso temporal del bloque 11 de acuerdo a las siguientes condiciones:

- El uso público se hará respetando el normal desarrollo de la actividad fabril y el normal desarrollo de las obras de urbanización y edificación.
- La comisión de vecinos de Labordeta velará por la conservación y mantenimiento del uso que se hace del edificio. Las entidades firmantes mantendrán una póliza de responsabilidad civil.
- Se constituirá una comisión formada por miembros escogidos en las comisiones de gobierno que velaran por el cumplimiento de las cláusulas de acuerdo así como de las actividades que se desarrollen en el edificio.
- De acuerdo con la comisión anterior, por motivos de interés público el ayuntamiento podrá cambiar el uso del edificio.
- Por tanto, el incumplimiento de estas cláusulas así como los supuestos planteados en la legislación vigente, supondrá la extinción del acuerdo vigente sin tener que existir una compensación económica del Ayuntamiento a las diferentes entidades y estas deberán retornar el edificio.

Teniendo en cuenta que se trata de un equipamiento público, es el Ayuntamiento quién paga los gastos correspondientes a luz y agua, así como los gastos de obras de rehabilitación. Los gastos asociados al funcionamiento ordinario del bloque son asumidos por Can Batlló. La plataforma no acepta ningún tipo de subvención pública por parte del Ayuntamiento sino que opta por un sistema de autofinanciación. Dicho sistema, supone un retorno al proyecto ya sea de manera económica o social. Por ejemplo; si un colectivo utiliza un espacio de Can Batlló para ensayar teatro, puede pagar por el uso que ha realizado del espacio o bien ofrecer clases gratuitas al vecindario. La finalidad de este retorno es que haga más grande el proyecto. Los ingresos económicos que obtienen, proceden de: actividades se desarrollan en el lugar, actividades transversales (como el Bar), organización regular de eventos, donativos voluntarios y mecenazgo. Respecto a las actividades desarrolladas y posibles donativos, la asamblea general valora cada caso antes de su desarrollo de acuerdo a los siguientes criterios:

- Ausencia de las contrapartidas para el proyecto
- Impidan la viabilidad económica del proyecto

Respecto a su relación con el poder público, tienen buena relación y trabajan con ellos bajo acuerdos puntuales, como el que mantienen con Barcelona Activa. A través de Can Batlló, las personas desempleadas trabajan en tareas de mantenimiento o en las comisiones de trabajo, por lo general durante unos seis meses y Barcelona activa les paga a través de ayudas de la UE.

## 2.2. De Meevaart

El centro social De Meevaart está situado en el barrio Indische de Ámsterdam. El barrio tiene una población étnica con un 67% de residentes originariamente inmigrantes, principalmente marroquí, turcos, chinos y surinamés (Samen Indische Buurt 2009:40). Tal y como afirman Firoez Azarhoos i Peter Smeets (2013) este vecindario está obteniendo mucha atención en congresos nacionales debido al rápido crecimiento de capital social, iniciativas ciudadanas y la formación de redes entre ciudadanos.

El centro fue gestionado por una organización de bienestar social hasta 2010. Con la llegada de los recortes y un déficit de 50.000 euros, el centro fue clausurado. Frente a la ausencia y necesidad de servicios

sociales, un grupo de vecinos del barrio se organizan bajo la forma de fundación (De Meevaart) para solicitar al Ayuntamiento la gestión del centro. La fundación propone una nueva forma de gestión más eficiente para equilibrar los gastos que produce el centro. Para ello, se produjo un incremento de voluntarios para realizar determinadas tareas, como la abertura de una sala de teatros y un restaurante. Tras constituirse como fundación (condición necesaria para gestionar el centro), el Ayuntamiento les ha permitido el uso temporal del centro.

El colectivo desarrolla actividades de integración social para residentes vulnerables, estas también están abiertas al público en general. Además, las actividades son gratuitas para los colectivos vulnerables mientras que los que no se encuentran dentro de estos criterios deben asumir el coste de la misma. Por otro lado, todas las salas del edificio están disponibles para el alquiler por parte de organizaciones que quieran desarrollar sus proyectos en el centro. Las actividades ofertadas deben ser accesibles para todos evitando que excluyan algún tipo de colectivo y priorizando aquellas que promuevan la integración. Además, el desarrollo se realiza de manera conjunta para fomentar la cooperación entre organizaciones. Desaconsejan el alquiler de las salas a propuestas que no van con sus metas pero lo condicionan a mantener un presupuesto equilibrado. En este lugar se anima a la gente a participar, planificar y emprender proyectos personales.

La relación con las instituciones académicas es buena pero no tienen contratos formalizados porque no saben hasta cuando tendrán el uso temporal del lugar. Consideran que el lenguaje del gobierno es totalmente diferente al suyo y que es necesario un cambio del mismo para llegar a una gestión más eficiente. Respecto a la gestión anterior a 2010, consideran que suponía mucho coste y poco rendimiento, mientras que ahora mismo consideran que son el mejor centro social en cuanto a gestión económica. Desde su punto de vista, ellos no realizan otra función más que dotar de espacio para que diferentes personas se unan y creen proyectos conjuntamente. La puerta está abierta para todo el mundo y la gente del barrio considera el edificio como propiedad suya.

El centro recibe una subvención anual por parte del Ayuntamiento en calidad de subsidio para garantizar las actividades para los grupos de prioridad del centro (vulnerables). No obstante, la comunidad considera que son insuficientes y querrían sustituirlo por la siguiente modalidad: perder la subvención a cambio de que el Ayuntamiento pagase por el uso del espacio por parte de los grupos específicos así como las horas invertidas en ellos. Si se aceptase esta condición, se cambiarían los roles y sería la comunidad quien fijase el presupuesto que debería pagar el Ayuntamiento. Actualmente ellos se consideran una organización sin ánimo de lucro pero su objetivo es obtener dinero a cambio de los servicios que prestan al barrio.

### **3. DISCUSIÓN**

A la luz de lo expuesto, cabe señalar que si se hace una comparativa de ambos casos de estudio, se pueden observar tanto elementos comunes como diferenciadores, pero la cuestión más importante es: ¿Qué está ocurriendo? Es evidente que todas estas iniciativas están mostrando la reclamación por parte de los ciudadanos para tener una mayor participación en la esfera pública. Todos estos procesos bottom-up tienen un impacto directo e indirecto sobre el territorio: la toma de edificios abandonados, recuperación de espacios en desuso, solares abandonados... están conformando un nuevo modelo de ciudad que no se encuentra dentro de ningún plan previsto.

¿Por qué han surgido estas iniciativas? Bajo mi punto de vista, es muy complicado definir una única causa del surgimiento de esta nueva forma de hacer ciudad pero parece que está determinada por los siguientes factores político-sociales y burocráticos:

- La lentitud del planeamiento previsto frente a demandas activas por parte de la ciudadanía.
- El contexto de austeridad económica que ha propiciado el abandono y la paralización de muchos planes.
- La percepción de la ciudadanía de la crisis del Estado del bienestar que ha supuesto un cambio en la mentalidad de muchos ciudadanos (especialmente en Holanda) de actuar para solucionar sus problemas en vez de esperar que el Estado los solucione.
- La crítica a la democracia representativa donde el ciudadano percibe con más pesimismo el sistema democrático en cuanto a su funcionamiento, así como el papel (al margen del ejercicio del derecho a votar) que tienen en el mismo (decisiones alejadas del ciudadano).
- El descontento respecto a los procesos top-down y los procesos participativos. A pesar de que la gobernanza participativa está en la agenda política desde hace 20 años (Johanna Speer, 2012) su cuestionamiento en cuanto a una verdadera participación ciudadana es evidente.

Cabe destacar, el alcance de la aprobación de ley de soporte social en 2007 por parte del gobierno holandés. A partir de su implementación la relación entre ciudadanos y gobierno ha cambiado ya que esta ley

promueve la activación de los ciudadanos, fomentando que sean más responsables de su propio bienestar. Este nuevo paradigma empodera a los ciudadanos y cambia el rol del Estado. Se trata de un enfoque muy liberal aunque muchos colectivos lo ven como un proceso de co-creación entre el Estado, los ciudadanos y posiblemente el sector privado (Smets and Firoez, 2013)

**Tabla 1.** Comparativa casos de estudio

<i>Elementos comparativos</i>	<i>De Meevaart</i>	<i>Can Batlló</i>
Tipo de servicio	Social	Social
Propiedad del edificio	Público	Público
Tipo de uso	Temporal	Temporal
Colectivo que lo gestiona	Asociación de vecinos	Asociación de vecinos
Causas del origen de la iniciativa	Cierre del centro como consecuencia de los recortes del Ayuntamiento	Reclamación de equipamientos públicos para el barrio
Gestión económica	Subsidio por parte del Estado + Ganancias obtenidas de las actividades desarrolladas	Ganancias obtenidas de las actividades desarrolladas + Pago de servicios de luz y agua por parte del Ayuntamiento.
Status de los responsables	Voluntarios	Voluntarios
Relación con el poder público	Formalmente correcta e instrumentalizada a través de un convenio	Formalmente correcta e instrumentalizada a través de un convenio + Acuerdos puntuales con organizaciones públicas para el desarrollo de determinadas actividades
Tipo de iniciativa	Cívica	Híbrida
Actividades desarrolladas	Servicios de integración social al vecindario + Emprendedurismo social	Servicios públicos al vecindario como biblioteca + Talleres de servicio social y ocio
Estado del edificio	Edificio nuevo	Antigua nave industrial
Posible evolución	Privatización del servicio público	Mantenimiento de los servicios públicos que se prestan

El gobierno holandés está analizando la eficiencia de estas iniciativas en relación a los servicios públicos ofrecidos y si estos, son más eficientes que si los ofertase el Estado. No obstante, la cuestión no es sólo la eficiencia de estas iniciativas sino si garantizan el acceso y uso público para todos los ciudadanos. Las políticas europeas en materia económica, están produciendo un desmantelamiento del Estado del Bienestar. Frente a esta crisis, muchos Estados con enfoque liberal se plantean estas iniciativas como una oportunidad para gestionar la austeridad.

Como se ha comentado anteriormente, estas iniciativas están conformando una nueva ciudad al margen del planeamiento existente. Por lo general, se concentran principalmente en: edificios abandonados, espacios públicos en desuso, reivindicación de más espacio público o zonas verdes. ¿Qué debe hacer el poder público frente a este tipo de iniciativas? ¿Debe ser flexible? ¿Dónde está el límite de esa flexibilidad? La proliferación de estas iniciativas tiene tanto efectos positivos como negativos. Desde el punto de vista social, se crea cooperación vecinal (cambio de mentalidad en la ciudadanía; de la competencia a la cooperación. (Fung et al, 2001)), redes sociales entre diferentes actores y emprendedurismo; se genera un tipo de dinamismo que no tiene lugar cuando hablamos de iniciativas propuestas por el poder público. Las iniciativas bottom-up reducen el clientelismo y tienen una orientación más práctica a los problemas reales, del modo que en muchas ocasiones presentan una efectividad superior respecto al poder público. ¿Por qué los ciudadanos han solucionado el problema y la administración no lo ha resuelto? En el contexto español, el estado de parálisis y recortes está dando paso a esta nueva forma de gestión local (Carmen Feliu)

No obstante, la ausencia de cualquier tipo de control público en la proliferación de estas iniciativas

puede tener varios efectos:

- En primer lugar, pueden crear competencia con servicios públicos ya implantados como puede ser bibliotecas o centros sociales.
- La ausencia de una visión supramunicipal puede ocasionar conflictos entre diferentes municipios o distritos así como una indefinición de estrategia global para la ciudad.
- Por último, el gestor público se ve sometido a la complicada decisión de establecer límites y en que iniciativas debe ser flexible así como si su implantación es únicamente temporal o debe mantenerse en el tiempo con la consiguiente y posible confluencia de intereses.

En el caso De Meevaart, estamos viendo que un servicio público como es la integración social, ha pasado de ser gestionado por la administración pública a serlo por una comunidad de vecinos. Cabe destacar que el servicio ofrecido es bueno y está ofreciendo muchas oportunidades para los residentes en la zona, no obstante, para garantizar que el servicio ofrecido sea público sería necesaria una evaluación por parte del poder público tal y como ocurre en Can Batlló. Asimismo debe valorarse que si es complicado conseguir que un espacio público como puede ser una plaza, sea de acceso para todo el mundo, más aun todavía, lo es una iniciativa que presta un servicio público y proviene de un colectivo determinado. De Meevaart, muestra la actitud empresarial de la ciudadanía muy asentada en los países bajos. El objetivo de la fundación por controlar el presupuesto municipal puede ser visto como una manera de ser más eficientes o como el paso previo a la posible privatización de un servicio público. Por ello, puede que la búsqueda de eficiencia a la hora de controlar el presupuesto sea una buena iniciativa pero abre un peligroso camino en el trasvase de funciones del Estado a la ciudadanía.

El caso de Can Batlló, es un buen ejemplo de modelo de co-gestión; el Ayuntamiento asume los costes del equipamiento público, mientras un colectivo está ofreciendo servicios públicos a un barrio que los demanda. Además, el Ayuntamiento realiza un seguimiento para asegurar que se hace un uso público social y cultural de la nave. Esta iniciativa, ha permitido revalorizar una zona obsoleta por el planeamiento y darle un uso temporal a un edificio que no ofrecía ningún servicio para la ciudadanía. A pesar de lo positivo de la iniciativa, se deben considerar los problemas que pueden crear estos usos temporales en el planeamiento. ¿Van acordes con lo inicialmente previsto? ¿Cómo de flexible debe ser el Ayuntamiento ante la posibilidad de incorporar estas iniciativas al planeamiento?

En este caso, el área está destinada a equipamiento público, por lo que sería más fácil su integración en el plan. No obstante, cabe plantearse si este uso temporal debe hacerse o no permanente. En el supuesto de ofrecer un verdadero servicio público, se podría plantear su uso permanente. Can Batlló se enfrenta de momento a una posible extinción de su temporalidad, sin embargo, el gran apoyo social del barrio dificultaría una acción por parte del gobierno municipal. Como se puede ver, estas iniciativas ofrecen la oportunidad de desarrollar un modelo de co-gestión donde el ciudadano participa activamente en el desarrollo de un servicio social.

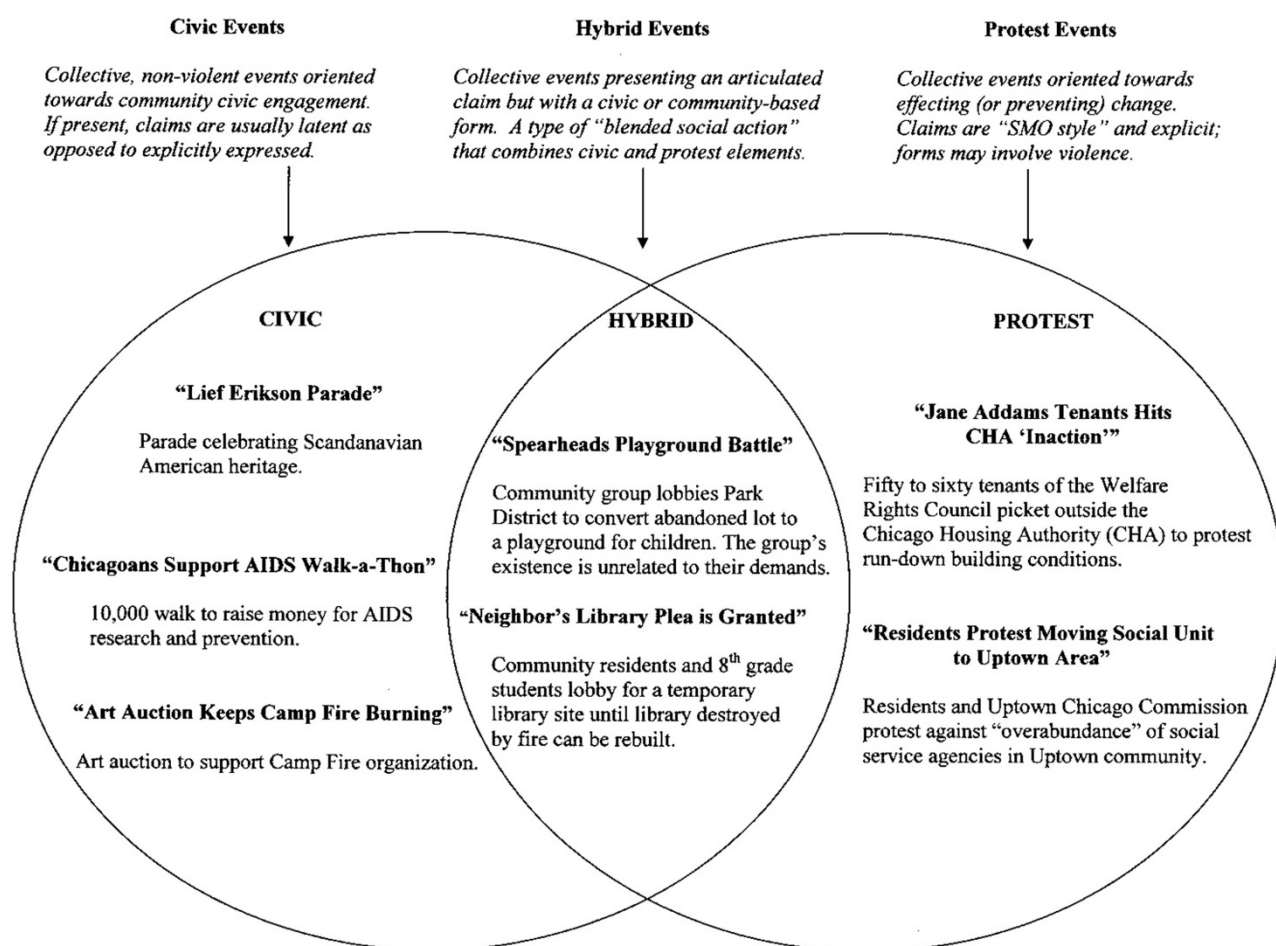
En general, estas iniciativas son ampliamente aceptadas por la ciudadanía. No obstante, debido a su rápido crecimiento e impacto sobre el territorio, cabría plantearse varias cuestiones. En primer lugar ¿Son legítimas? Surgen de la ciudadanía a nivel de barrio pero: ¿Está todo el barrio de acuerdo con la actividad que están desarrollando? primer punto débil (con opción de corregirse). No existe ningún mecanismo que legitime el desarrollo de estas iniciativas, ni un sistema de votación dónde se asegure que una mayoría del barrio está conforme al desarrollo de esta actividad. Necesita ser legitimada y para ello habrá que estudiar el o los sistemas que garanticen un amplio acuerdo entre miembros de la comunidad.

En ambos casos, nos encontramos ante la esfera local, cabe preguntarse: ¿Por qué surge precisamente en esta escala la mayor cantidad de estas iniciativas? La respuesta puede derivarse del hecho que el aparato burocrático no deja en muchas ocasiones percibir al ciudadano que él está participando en las decisiones que se toman en los niveles más cercanos a él. En este sentido, el espacio público se convierte en el campo de batalla, dónde los ciudadanos lo toman como espacio para la contestación respecto a un problema determinado. (Simon Spinger, 2013) ¿Cuáles serían las posibles soluciones? creo que debería estudiarse si es necesario el establecimiento de un nuevo nivel entre Ayuntamiento y ciudadanos para cada barrio. Se debe precisar que no sólo se trataría de establecer un nivel intermedio, sino de cambiar las relaciones existentes entre los ciudadanos y el poder público (Farinós 2014) tratando de ofrecer unas relaciones horizontales frente a la clásica relación vertical.

Las iniciativas bottom-up deberían asumir inicialmente un rol de temporalidad pero posteriormente, habría que valorar la forma en la que el conjunto de vecinos del barrio pudiera decidir mediante votación la resolución de una implantación permanente o eliminación. De esta manera, se podría asegurar la legitimidad de la misma por contar con un amplio respaldo a nivel de vecindario.

Dentro de este contexto, han surgido propuestas como G1000, desarrollada por Peter Vermeersch y David Reybrouck. Esta idea se ha realizado en varias ciudades y municipios de Holanda; Ameersfoort, Rotterdam, Groningen, pretende que un colectivo de 1000 personas elegido al azar en una población determinada, debatan y analicen los asuntos que deberían estar en la agenda política del municipio. El diálogo se basa en una discusión abierta en la que todos los participantes en igualdad de condiciones puedan expresar su opinión. Los participantes son autónomos, ellos eligen los temas juntos, trabajan sobre ello y hacen una selección de las soluciones propuestas. Como toda alternativa, tiene sus críticas pero podría ser una opción para que el ciudadano se sintiese más involucrado a nivel municipal. Otra de las propuestas que ha aparecido recientemente en Holanda es el caso de estudio realizado por Geurtz yWijdeven (2015) para el municipio holandés de Hoozeven, dónde los vecinos tienen el poder de decidir y hacer proyectos para el municipio sobre el presupuesto anual del Ayuntamiento. Bajo esta fórmula, se muestra la posible implantación de un mecanismo (no sin dificultades) de interacción entre la participación democrática directa y la democracia representativa en la realización de proyectos a corto plazo. En el análisis realizado por Geurtz yWijdeven (2015) concluyen que a partir del caso de estudio, la participación democrática directa no supone una desaparición o disolución de la democracia representativa sino que sigue jugando un importante rol político y administrativo en la delimitación de la extensión de la democracia directa.

Otro aspecto importante es caracterizar cada tipo de iniciativa para determinar en qué punto nos encontramos. Tal y como menciona Sampson (2005) cabe distinguir entre: cívica, híbrida y protesta (Figura 1).



**Figura 1.** Clasificación teórica de Sampson (2005) sobre los tres tipos de iniciativas colectivas.

De acuerdo a esta clasificación, las iniciativas bottom-up podrían considerarse como eventos híbridos. No obstante, la percepción del estado español sobre estas iniciativas está generalmente más asociada a un movimiento de izquierdas o protesta. Al contrario que ocurre en Holanda, los partidos liberales españoles todavía no han asumido el rol que pueden jugar este tipo de iniciativas en su concepción de estado.

Al igual que en el caso de Can Batlló, muchos de estos movimientos protesta han ido unidos a los comienzos de iniciativas bottom-up. En muchas de estos procesos, se encuentra directa o indirectamente implicada la plataforma 15M (hoy día un partido político; Podemos). ¿Es posible que se esté produciendo un



cambio? ¿De la protesta a la propuesta?

Parece evidente que las iniciativas bottom-up marcaran un antes y un después en la forma de hacer ciudad. Ante la falta de un mecanismo verdaderamente efectivo, es necesario proponer y estudiar nuevos modelos que puedan contribuir a una mejora del mismo. Por ello, se propone como posible opción buscar un mecanismo de co-gestión entre la ciudadanía y la administración pública, a través de ensayos prueba-error que permitan definir qué modelo es el más eficiente y democrático para planificar y gestionar la ciudad.

Existen evidencias de que el establecimiento de mecanismos de gobernanza participativa mejoran los flujos de información entre ciudadanos y gobierno, de manera que se conocen más claramente las preferencias de los mismos (Johanna Speer, 2012). De esta manera, nos encontramos ante la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen al ciudadano involucrándolo más directamente en la actividad pública sin suponer esto un trasvase de funciones por parte del Estado sino una co-gestión de lo público. En el contexto holandés de democracia local, hay nuevas formas experimentales que tratan de implicar a la ciudadanía optando por un fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones e implantación de puentes entre ciudadanos y gobierno. Los diseñadores institucionales se enfrentan al reto de crear estructuras políticas cuya legitimidad descansa en reflejar la precisión de la voluntad ciudadana así como la prontitud de las exigencias de gobernabilidad de un Estado moderno (Geurtz , Wijdeven,2015)

## **AGRADECIMIENTOS**

Quería agradecer en primer lugar la oportunidad que he tenido de poder realizar mi estancia en Ámsterdam a Joaquín Farinós Dasí y Aldert De Vries. Sin ellos, este estudio no habría sido posible. Por otro lado, quiero agradecer a los diferentes personas que me han proporcionado la información necesaria sin ningún problema; “Can Batlló”, Jordi Hereu, Carles Martí, Anna Domingo, Martinna Huisjam, Firoez Azaehoosh, Pierre, Imrat Verhoeven, Elvira, Simon Van Dommelen.

## **4. BIBLIOGRAFÍA**

- Cornwall, A. (2003): “New democratic spaces? The politics and dynamics of institutionalised participation. IDS bulletin 35.2
- Fung, A., Olin, E. (2001): “Deepening Democracy: Innovations in Empowered participatory Governance” POLITICS&SOCIETY, Vol 29 No.1
- Sanfeliu, C. (2013): “La activación de solares urbanos: de práctica alternativa a objeto de programas municipales .Biblio 3W.Revista bibliográfica de geografía y Ciencias sociales. Cuadernos críticos de geografía humana. Universidad de Barcelona.
- Azarhoosh, F. (2013): “Governance of liquid neighborhood communities and their relations with stakeholders in Amsterdam East”. University Amsterdam NSWP
- Verhoeven, I., et al. (2014): “Do-crazy’s democratic anchorage” Paper for the joint session on Systematizing Comparison of Democratic Innovations: Advanced explanations of the emergence sustenance and failure of participatory institutions, 42nd ECPR Joint sessions, Universidad de Salamanca.
- Speer, J. (2012): “Participatory governance reform: a good strategy for increasing government responsiveness and improving public services?” World development vol 40, No 12 pp 2379-2398
- Farinós, J. (2014): ” Ciudadano, poder, gobierno y democracia; una forma de relación inestable” La era de la política 2.0, Capítulo 1.Valencia, Ediciones Casas.
- Sampson, R., et al. (2005): “Civil society reconsidered: the durable nature and community structure of collective civic action”. American Journal of Sociology, 3, 673-714.
- Springer, S. (2010): “Public Space as emancipation: meditations on Anarchy, radical democracy, neoliberalism and violence” Antipode, Vol 43,pp 525-562.
- Geurtz,C ., Wijdeven, T. (2015): “Making citizen participation work: the challenging search for new forms of local democracy in the Netherlands” Tilburg School of Politics and Public Administration, Tilburg University , Netherlands
- K, Andersson., Laerhoven, F. ( 2007): “From local strongman to facilitator institutional incentives for participatory municipal governance in Latin America” V 40,Nº9,1085-111.